



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 335 – 2016 – GRJ/GGR.

Huancayo, 12 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTOS:

Memorando N° 1224-2016-GRJ/SG, Resolución Directoral Administrativa N° 675-2016-GRJ/ORAF, Memorando N° 616-2015-GRJ/ORAF, y el Informe Técnico N° 97-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

### Identificación de los procesados:

Apellidos y Nombres	Cargo	Desde	Hasta	Dirección	Resolución	DNI
CPC. LÓPEZ CANTORIN Henry	Gerente General Regional	03/01/2011	08/01/2014	Av. Yanama N° 1702-Hyo	Res N° 125-2011-GRJ-PR	41560405
CPC. SALVATIERRA RODRIGUEZ Luis Alberto	Director Regional de Administración de Finanzas	18/01/2011	31/12/2014	Jr. Los Rosales N° 281 - El Tambo	R.E.R. N° 123-2011-GR-JUNIN/PR	19990119
Abg. LUYA PEREZ Rodrigo	Sub Director de Recursos Humanos	24/03/2011	31/12/2014	Psje. Espíritu N° 200- El Tambo	R.E.R. N° 299-2011-GRJ/PR	23714176

### CONSIDERANDO:

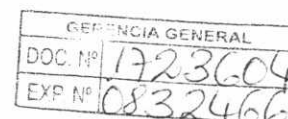
### DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene del memorándum N° 616-2015-GRJ/ORAF, de fecha 07 de setiembre del 2015, emitida por la Directora Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín, los cargos imputados contra los ex funcionarios públicos CPC. HENRY LÓPEZ CANTORIN, CPC. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ y ABG. RODRIGO LUYA PERÉZ; consiste en que:

Habrían efectuado pago al personal reincorporado por sentencias judiciales contraviniendo las leyes del presupuesto del Sector Público, ya que cualquier reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones entre otros conceptos, la entidad debe dar cumplimiento al marco normativo de la Ley de Presupuesto del Sector Público, por lo que a fin de deslindar responsabilidades, la Oficina de Recurso Humanos se debe pronunciar a través de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos a fin de adoptar las acciones administrativas, legales pertinentes contra los responsables que emitieron las Resoluciones Directorales de los años 2011 al 2014, aprobando los pagos de contraprestaciones del personal contratado reincorporado por mandato judicial con importes distintos a lo indicado en su último contrato e inclusive otorgaron bonificaciones y beneficios (escolaridad) al margen de lo dispuesto en las normas vigentes.

### DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:





Del memorando N° 616-2015-GRJ/ORAF, de fecha 07 de septiembre del 2015, suscrita por la Directora Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín, mediante la cual dispone el deslinde de responsabilidades, la Oficina de Recursos Humanos se debe pronunciar a través de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios adopte las acciones administrativas pertinentes contra los responsables de la emisión de las resoluciones directorales de los años 2011 al 2014, donde se aprobó los pagos de contraprestaciones del personal contratado reincorporado por mandato judicial con importes distintos a lo indicado en su último contrato e inclusive otorgaron bonificaciones aguinaldos y beneficios (escolaridad) al margen de lo dispuesto en las normas vigentes.

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

**Resolución Directoral Administrativa N° 040-2011-GRJ/ORAF** de fecha 24 de febrero del 2011 firmado por el Director Regional de Administración y Finanzas y visado por el Sub Director de Recursos Humanos, mediante la cual se refiere sobre la situación de los trabajadores reincorporados por mandato judicial en el Gobierno Regional de Junín y sobre el correspondiente presupuesto para el pago de contraprestaciones del año 2011.

**Resolución Directoral Administrativa N° 471-2012-GR-JUNIN/ORAF** de fecha 27 de agosto de 201, firmado por el Director Regional de Administración y Finanzas y visado por el Sub Director de Recurso Humanos, hace mención el pago de contraprestaciones del personal reincorporado por mandato judicial; asimismo indica que se la aprobación la escala de contraprestaciones del personal contratado bajo el régimen de contraprestaciones del personal contratado bajo régimen de contrataciones administrativa de servicios – Decreto Legislativo N° 1057, según Resolución Directoral Administrativa N° 029-2011-GR-JUNIN/OGRA.

**Resolución Directoral Administrativa N° 063-2013-GRJ/ORAF** de fecha 30 de enero del 2013 firmado por el Director Regional de Administración y Finanzas y visado por el Sub Director de Recursos Humanos, que tiene como antecedente el reporte N° 036-2013-GRJ/ORAF/ORH de fecha 22 de enero del 2013, emitida por el Sub Director de Recursos Humanos requiriendo autorización del pago en merito a las sentencias judiciales.

**Resolución Directoral Administrativa N° 071-2014-GRJ/ORAF** de fecha 28 de enero del 2014 firmado por el Director Regional de Administración y Finanzas y visado por el Sub Director de Recursos Humanos, el mismo que tiene como antecedentes las medidas cautelares y sentencias judiciales, aprueba el pago de sentencias judiciales durante el ejercicio presupuestal 2014 del personal contratado reincorporado por mandato judicial, asimismo se aprobó el pago de fiestas patrias y navidad así como el pago de escolaridad a razón de S/. 300.00 y S/. 400.00 nuevos soles por servidor.

#### TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.° 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).





Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados al involucrado, constituiría faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:

<b>Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil</b>	Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley”.
--	--

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98° del Reglamento de la Ley N°30057, aprobado por D.S. N° 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*



De igual forma; lo establecido, en los incisos a) y d) del artículo 39°-Ley 30057, Ley de Servicio Civil, que prescribe: *“Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes: (...) a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público” y “d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplearlo austeramente los recursos públicos”.*

#### **Esto al haber, transgredido:**

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, “Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

En ese mismo sentido; el artículo 6° de la Ley N° 30281-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015, y de las leyes de presupuesto de los años 2011 al 2014, *“prohíben en las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera fuera su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuentes de financiamientos. Asimismo queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivo, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, con las mismas características señalada”.*



Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

### **SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-**

Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la **Sentencia N.º 090-2004-AA/TC**, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, estando a lo antes colegido; y teniendo en cuenta el Memorandum Nro. 616-2015-GRJ/ORAF, las faltas disciplinarias imputadas al CPC. HENRY LÓPEZ CANTORIN, CPC. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ y ABG. RODRIGO LUYA PERÉZ, sería, por cuanto:

- a) El ex Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín CPC Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, habría suscrito la Resolución Directoral Administrativa N° 471-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 27 de agosto del 2012, Resolución Directoral Administrativa N° 063-2013-GRJ/ORAF de fecha 30 de enero y la Resolución Directoral Administrativa N° 071-2014-GRJ/ORAF de fecha 28 de enero del 2014, sobre la incrementación de sus remuneraciones a los reincorporados sin una orden judicial; ya que el poder judicial ordena la reincorporación de los ex trabajadores a su mismo cargo o similar y a su última remuneración antes de su cese y habría infringido la Ley de Presupuesto de los años 2012 al 2014 que prohíben en las entidades del estado el reajuste o incremento de remuneraciones entre otros.
- b) El ex Sub Director de la Oficina de Recursos Humanos Abg. Rodrigo Luya Pérez por haber visado la Resolución Directoral Administrativa N° 471-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 27 de agosto del 2012, Resolución Directoral Administrativa N° 063-2013-GRJ/ORAF de fecha 30 de enero del 2013 y la Resolución Directoral Administrativa N° 071-2014-GRJ/ORAF de fecha 28 de enero del 2014, por lo que presuntamente dicho ex funcionario habría estado de acuerdo a dicho incremento de remuneración económica a los trabajadores







- reincorporados por mandato judicial, a sabiendas que la Ley de Presupuesto lo prohíbe.
- c) El ex Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC Henry López Cantorin, fue responsable de la entidad y debió de verificar el buen funcionamiento de la administración de presupuesto público de esta entidad por lo que es responsable solidario conforme lo señala el artículo 7° de la Ley General Nacional del Sistema Nacional de Presupuesto, toda vez que presuntamente habría malversado fondos del estado en razón de que estaba prohibido dar uso del presupuesto de la específica 25.51.1.99 para similar pago de la específica 21.11.

De lo que se llega a deducir; que en la Resolución Directoral Administrativa N° 040-2011-GR-JUNIN/ORAF de fecha 24 de febrero del 2011, los pagos de los servidores reincorporados por orden judicial fueron conforme a sus remuneraciones que percibían antes de su cese; pero en la Resolución Directoral Administrativa N° 471-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 27 de agosto del 2012, en su artículo segundo aprueba el pago de sentencias judiciales, a partir del 01 de agosto del 2012, por concepto de contraprestaciones al personal contratado por mandato judicial por la específica 25.51.1.99 que son para gastos judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia de personal de otros regímenes por lo que puede verificar que habido un incremento de percepción económica para los trabajadores reincorporados por sentencia judicial; asimismo esta específica solo es para pago de sentencia judicial, mas no para pago de remuneraciones.



Debemos tener en cuenta que dentro de la estructura presupuestal tenemos diferentes específicas para el pago de remuneraciones, pago de servicios, compras entre otros, así que las específicas 21.11 y 21.12 corresponde el pago de los trabajadores bajo el régimen 276 y la específica 23.28.11 para trabajadores de CAS

Que, en el caso de los trabajadores reincorporados a la específica 21.11 fondo del cual debió pagársele, sin embargo su pago fue realizado por la específica 25.51.1.99, que corresponde a gastos judiciales no corresponde a pago de remuneraciones, por lo que existe una evidente malversación de fondos con la agravante de incrementarse el sueldo vía resoluciones administrativas indicado líneas arriba.

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éstos administrados, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado, al haberse malversado fondos del estado por cuanto está prohibido coger presupuesto de la específica 25.51.1.99., para similar pagos de la específicas 21.11; sin embargo, en ella, no se puede apreciar con exactitud la magnitud de los daños y perjuicios a la Entidad; por ende, para efectos de determinar la sanción debe ser proporcional a la falta cometida, teniendo en cuenta la forma, modo y circunstancias de cómo se suscitaron; y, no existiendo la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidente en la comisión de faltas; una posible sanción puede servirles para advertirles sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la persistencia en sus conductas infractoras; consecuentemente, la posible sanción a imponérseles a los involucrados sería **Suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057 artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.



### ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

El órgano instructor en estos casos resulta competente el Gerente General Regional del GRJ, por ser máxima autoridad administrativa en la Entidad.

### PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que el procesado presente sus descargos en el proceso se deberá brindarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles, ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

### DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:



**“Artículo 96.1.** Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

**Artículo 96.2.** Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

**Artículo 96.3.** Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

**Artículo 96.4.** En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in idem;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por esta Gerencia General Regional, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** contra los siguientes ex funcionarios:

- ✓ **CPC. Henry Fernando LÓPEZ CANTORIN**, en su condición de Gerente General, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El**



**incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y q) Los demás que señale la Ley.**

- ✓ **CPC. Luis Alberto SALVATIERRA RODRIGUEZ**, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y q) Los demás que señale la Ley.**
- ✓ **Abg. Rodrigo LUYA PÉREZ**, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y q) Los demás que señale la Ley.**

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** el presente acto administrativo a los funcionarios comprendidos en el procedimiento que se está instaurando, otorgándole el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

  
Abog. JAVIER CAURY SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 OCT 2016

  
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL